



JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Sección Tercera

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
REFERENCIA	Expediente No. 11001333603420230011600
DEMANDANTE	María Katherine Sáenz Urquijo y otros
DEMANDADO	Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central Hospital Regional de Moniquirá Hospital Universitario San Rafael de Tunja
MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
ASUNTO	Decide sobre recursos contra decide llamamientos

La presente demanda pretende que se declare responsable a las demandadas Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional -Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central, Hospital Regional de Moniquirá, Hospital Universitario San Rafael de Tunja por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes María Katherine Sáenz Urquijo, José Luis Pulido Sosa , María Trinidad Urquijo Bohórquez , Juan De Jesús Sáenz , Luis Antonio Pulido Parra, Edna Roció Sáenz Urquijo (Tía materna), Darlin Andrea Sáenz Urquijo, Paula Yesenia Sáenz Urquijo, Fabian Andrés Pulido Sosa y Yuly Paola Pulido Sosa a raíz de la muerte de la menor Sara Antonella Pulido Sáenz ocurrida el 7 de septiembre de 2022.

1. Antecedentes

El 28 de junio de 2023 se inadmitió la demanda

El 10 de mayo de 2024 se admitió demanda.

El 28 de marzo de 2025 se decidió sobre los llamamientos en garantía.

En informe secretarial del 10 de abril de 2025 se anotó: “*RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN EN CONTRA DEL AUTO ANTERIOR SÍRVASE PROVEER*”

Procede el despacho a pronunciarse en los siguientes términos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Del recurso de reposición y en subsidio apelación, oportunidad y procedencia

El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, señala que el recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.

En el presente caso comoquiera que no existe otra norma que así lo indique, el recurso interpuesto resulta procedente.

Dicho recurso debe interponerse dentro de los **tres (3)** días siguientes al de la notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso en el cual debe interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto (Artículo 349 Código de Procedimiento Civil).

En auto el en cuestión fue notificado por estado el 31 de marzo de 2025, por lo que se tenía hasta el 3 de abril de 2025 para presentar los recursos de reposición y apelación y como fueron interpuestos, así: el 1 de abril de 2025 por parte del Hospital Regional de Moniquirá y el 2 de abril la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central encuentra el Despacho que fueron presentados en tiempo.

2.2. Estudio de los recursos

2.2.1. Recursos Hospital Regional de Moniquirá

“...Del llamamiento en garantía de Hospital Regional de Moniquirá a SEGUROS DEL ESTADO S.A., ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y SEGUROS MUNDIAL S.A. por los contratos suscritos por sus prestadores de servicios Lo primero a señalar es que el reparo frente al auto es únicamente respecto de los llamamiento en garantía que le fueron negados a esta ESE. El Art. 225 del C.P.A.C.A, establece: (...) De la norma transcrita, se deriva entonces, que éste tipo de llamamiento en garantía, requiere como elemento esencial, que en razón de un derecho legal o contractual, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandando, se vea obligado a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago, y así mismo, quien realiza el llamamiento, deberá aportar la prueba siquiera sumaria del derecho a formularlo, y la existencia y representación legal del llamado, cuando éste se dirige contra una persona jurídica. Así las cosas y estudiado los llamamientos en garantía que se presentan, vemos que se encuentra demostrado que las aseguradoras llamadas en garantía tenían vigente para la época de los hechos sus respectivas pólizas, donde el beneficiario es la ESE Hospital Regional de Moniquirá, y aparan los contratos vigentes para la época de atenciones prestadas a la demandante. En cuanto a la relación por derecho legal o contractual, se advierte que si bien en este caso quien llama en garantía es el beneficiario de la póliza, es decir la ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, se considera procedente y se trae a contexto pronunciamiento del CE, donde en un caso de similares contornos señaló: “...Esta Corporación ha sostenido jurisprudencialmente que la interpretación normativa del artículo 225 del CPACA, soporta la representación de que el asegurado cuando considera que ha sido perjudicado como beneficiario del contrato de seguro, podrá tener derecho contractual para pedir directamente a la aseguradora que el mismo le sea indemnizado. NOTA DERELATORÍA: Referente a la interpretación del artículo 225 del CPACA y la reclamación del asegurado, consultar providencia de 21 de marzo de 2017, Exp. 55409, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa...” Lo anterior para señalar que se aportó con los escritos de llamamiento la prueba de la existencia de una relación de carácter contractual con la ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA, por lo que son procedentes los llamamientos en garantía elevados. La jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a la figura procesal analizada ha precisado 1 que: “En los procesos contencioso administrativos en los que se ha formulado un llamamiento en garantía, surgen dos relaciones procesales perfectamente diferenciadas que deben ser resueltas por el juez: i) el litigio que se traba entre demandante y entidad demandada, derivado de las pretensiones que el primero aduce frente a la segunda y que apuntan a obtener una condena en su contra y ii) la relación que surge entre demandado y llamado en garantía, en la cual aquel asume

la posición de demandante frente a éste, de quien reclama un reconocimiento económico con fundamento en una relación de garantía de origen legal o contractual. El juez debe resolver en primer término el litigio principal, en el que se decide sobre las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso, pues si concluye que existe la responsabilidad de la entidad demandada frente al demandante y la procedencia de su condena, deberá efectuar a continuación, el análisis de la relación entre aquel y el llamado en garantía, para establecer si éste se halla obligado a responder frente al demandado por todo o parte de lo que haya tenido que pagar en virtud de la condena en su contra.” Ahora bien, frente a la solicitud del llamamiento en garantía de una aseguradora, respecto de la aprobación del mismo, el Consejo de Estado ha dicho 2 : “(...) Establece igualmente el artículo 1046 del Código de Comercio que, con fines probatorios la aseguradora deberá entregar al tomador el original de la póliza, lo que lleva a concluir que en el evento de que el tomador quiera llamar en garantía a la Aseguradora con fundamento en la póliza de seguro, éste deberá aportar el original que se encuentra en su poder, en los términos del artículo 268 del C. P. Civil, norma que regula la forma en que deben ser aportados al proceso los documentos privados que se encuentran en poder de la parte que los aporta, calidad que en este caso ostenta el tomador frente a la póliza en la que se plasma el contrato de seguro. Ahora bien, si la póliza no puede aportarse en original, habida cuenta de que se encuentra en otro proceso del cual no puede ser desglosada, o por cualquier circunstancia que deberá ser suficientemente explicada en el proceso el por qué no se encuentra en poder del tomador, es deber de la parte llamante, con miras a probar el fundamento contractual en que apoya el llamamiento en garantía, aportarla en copia auténtica en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al caso de la referencia por no existir regulación sobre el tema dentro del Código Contencioso Administrativo”. De conformidad con lo expuesto en los escritos de llamamiento, se establece que los mismos se fundan en una relación legal y contractual, derivada de unos contratos de seguro cuya prueba en los términos del artículo 1046 del Código de Comercio, se logra con el escrito que contiene el contrato o por confesión. Además, la norma ibidem consagra que con fines probatorios la aseguradora deberá entregar al tomador el original de la póliza, lo que lleva a concluir que en el evento de que este último quiera llamar en garantía a la aseguradora con fundamento en la póliza de seguro, deberá aportar el documento prueba. Con ese propósito, fueron aportadas la totalidad de las pólizas. Ahora bien, en las solicitudes se anota la representación legal de las aseguradoras como también los canales de notificación electrónica de las aseguradoras. De acuerdo con lo expuesto es dable la admisión de los llamamientos en garantía, por cuanto las solicitudes reúnen los requisitos necesarios que justifican de un lado el llamamiento y de otro se encuentran los canales de notificación...”

2.2.2. Recursos Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central

“...Conforme a lo expuesto, se debe señalar que, inicialmente las disposiciones procedimentales, de las cuales tiene como insumo de la jurisdicción de lo contencioso, solo permitían el llamamiento en virtud de un tercero (c.p.c); in embargo, con el advenimiento de la Ley 1564 de 2012, este procedimiento se vio transformado, efectivizando los principios constitucionales y procesales de economía procesal y acceso a la

administración de justicia. Esto permitió que en un mismo proceso se resolviera tanto el objeto principal de la causa como la relación del llamamiento en garantía frente a un tercero, sin excluir a la parte pasiva bajo la relación contractual que las vincula. En este sentido, el tenor literal del artículo 64 del Código General del Proceso establece lo siguiente: Artículo 64. Llamamiento en garantía Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación En relación a lo anterior y a lo expuesto en la contestación de la demanda, dentro del lineamiento defensivo de la entidad que represento, se sustenta en que no se encuentra acreditado el nexo de causalidad entre el daño y la supuesta falla en el servicio, pues como se puede apreciar las atenciones medicas se ejecutaron con la red externa de la cual se tenían suscritos sendos contratos de prestación de servicios así : No 95-7-20023-19, CONTRATO 95-7-20038-2020, CONTRATO 81-5-20088- 21con LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA con Nit: 891800231- y con el HOSPITAL DE MONIQUIRÁ con Nit891800395-1, los CONTRATO 95-7-20258-19; CONTRATO 95-720239-2020 y CONTRATO 81-5-20083-21. A pesar de haber sido demandados en el proceso como parte pasiva, como presunto causante del daño, debe tenerse en cuenta que las anteriores ips tenían con Disan una relación contractual para la prestación del servicio en salud durante la fecha de los hechos que se relatan en la demanda. En marco de los compromisos contractuales, se tenían establecidos una serie de obligaciones para la atención de los pacientes, se debía realizar con apego a la lex artis, con diligencia, y cuidado. La jurisprudencia también establece que el llamamiento en garantía no puede resultar redundante o inocuo. En el presente caso, dado que el llamamiento en garantía está fundamentado en relaciones contractuales que afectan directamente la posible condena a las partes demandadas. Este I llamamiento no resulta innecesario ni redundante, ya que la necesidad del mismo, lo es, para garantizar que, en caso de que se imponga una condena, el tercero que tiene una responsabilidad contractual o legal asuma las consecuencias, permitiendo a la entidad una exoneración total de los perjuicios que se llegara a condenar. Asimismo, esta parte ha dado cumplimiento a los preceptos jurisprudenciales, en sentido, que el llamamiento en garantía, está directamente vinculado al objeto del litigio, es decir, que debe estar relacionado con la causa que origina la demanda. En el presente caso, el llamamiento en garantía cumple con este requisito, pues se deriva de una relación contractual que vincula a las partes con el objeto litigioso. Por tanto, no resulta impertinente, redundante ni inocuo que se realice el llamamiento, ya que la relación entre las partes y la parte llamada en garantía está directamente relacionada con los hechos que se están litigando. Adicionalmente , el Consejo de Estado, ha referido para aceptación para que el llamamiento en garantía sea procedente, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que el llamamiento se deriva de fuentes distintas a las que vinculan a las partes demandadas con el daño u objeto del litigio.y 2. Que no se sustente en la solidaridad o corresponsabilidad, sino en una relación contractual o legal específica. En este caso, el llamamiento en garantía no se fundamenta en una corresponsabilidad general, sino en relaciones contractuales específicas que justifican que el tercero llamado en

garantía asuma la responsabilidad en caso de condena. Por tanto, no existe fundamento alguno para rechazar este llamamiento. En consecuencia, la entidad demandada (DISAN), en virtud de la solicitud que se presenta, sostiene que, en caso de no admitirse lo solicitado, es decir, la aceptación del llamamiento en garantía a las codemandadas, la cuestión interna derivada de la relación sustancial con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado entre ambas entidades quedaría sin resolución judicial. No puede obviarse que las demandadas fueron convocadas a juicio para que se declararan solidariamente responsables de los perjuicios causados a los actores, lo cual debe ser examinado. La relación de responsabilidad frente al presunto daño ante la víctima es solidaria; por lo tanto, una vez realizado el pago correspondiente a la víctima, la relación interna entre los deudores deberá regirse conforme a los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios pactado entre las partes...”

2.3. Decisión del despacho

2.3.1. Recurso de reposición del Hospital Regional de Monquirá

El despacho confirmará la decisión adoptada en relación con los llamamientos que le fueron negados al Hospital Regional de Monquirá, toda vez que las pólizas aportadas son claras en señalar que el origen de la posible cobertura que estarían llamadas a otorgar, es la relación contractual que existió entre unos prestadores de servicios médicos, -quienes no fueron demandados ni llamados en garantía- y el hospital demandado, con lo cual deviene evidente que las mismas no tendrían aplicación en un escenario de responsabilidad extracontractual.

La jurisprudencia que cita parcialmente el apoderado resulta abiertamente impertinente, pues la misma recayó sobre controversia contractual, en la que sí resulta factible demandar o llamar en garantía directamente a la aseguradora. Consideraciones que no pueden ser simplemente extrapoladas a un escenario en el que lo que se discute es una responsabilidad extracontractual derivada de una presunta falla médica.

Aunado a lo anterior, el llamado en garantía resulta claramente innecesario, cuando dentro de la misma providencia se cito a las aseguradoras que constituyeron en favor de la demandada pólizas que sí serían pertinentes frente a un caso de responsabilidad médica que se analiza.

Con lo cual se hace palpable que el llamado de quienes *a priori* no tienen ninguna vocación de responder sólo sirve al propósito de entorpecer y dilatar la resolución de la controversia.

2.3.2. Recurso de reposición de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central

El despacho confirmará la decisión adoptada en relación con el llamado que le fuera negado a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central frente a las demás demandadas, por considerar que resulta *redundante, innecesario e inocuo*, términos con los que la jurisprudencia califica a aquellos llamamientos en garantía realizados a la coparte que no se derivan de fuentes diferentes a las que se relacionan respecto de un mismo daño.

No se desconoce entonces que el llamamiento de la coparte se encuentra reconocido en el ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, se aplican los requisitos que la misma jurisprudencia le ha trazado a la figura, con el fin de evitar, precisamente, citaciones *ad infinitum* que en nada aportan en la resolución de la controversia.

Es evidente entonces que, a partir de lo señalado por la entidad en su contestación, el despacho, una vez determinada la existencia de responsabilidad, -si es que la hay-, deberá referirse a la pregunta de quién debe responder y lo deberá hacer a partir de las relaciones contractuales subyacentes que han sido puestas de presente, sin que para tal efecto, sea necesario realizar una citación a quien ya es parte para que se manifieste nuevamente sobre algo frente a lo cual ya se ha podido y podrá referir.

Como en el anterior caso, el uso de la figura del llamamiento en garantía se evidencia como un mecanismo cuyo único fin práctico, es provocar citaciones y dilaciones innecesarias, y por tal razón el despacho ratificará su decisión, pues en su condición de director del proceso tiene el deber de: *“...velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal.”*¹

2.4. De los recursos de apelación

2.4.1. Recurso de apelación Hospital Regional de Monquirá

De acuerdo con lo señalado en el artículo 243 del CPACA, el auto que niega la **intervención de terceros** es susceptible del recurso de apelación por lo que se concederá el mismo en el efecto suspensivo, de acuerdo con lo indicado en el artículo 226 del mismo estatuto.

2.4.2. Recurso de apelación Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central

El despacho encuentra que el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central, resulta improcedente, pues la norma es clara en señalar que sólo es susceptible de apelación la providencia que niega la intervención de **terceros**, y como lo aquí negado fue la citación de quien ya es parte, es evidente que la concesión del recurso sería solo en virtud de una interpretación extensiva de la norma, que se encuentra carente de fundamento y necesidad.

Por lo expuesto **SE RESUELVE:**

PRIMERO: CONFIRMASE la providencia del 28 de marzo de 2025 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCÉDASE el recurso de **APELACIÓN** interpuesto por Hospital Regional de Monquirá contra la providencia del 28 de marzo de 2025, en el efecto suspensivo.

¹ Artículo 42 Código General del Proceso.

TERCERO: NIÉGUESE por improcedente el recurso de apelación interpuesto por Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional - Dirección de Sanidad Policía Nacional - Hospital Central, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Una vez ejecutoriado el presente auto, remítase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el expediente de la referencia a través de SAMAI, haciéndose las anotaciones del caso.

Los memoriales dirigidos a este juzgado en atención a la **circular PCSJC24-1**, los memoriales, peticiones y escritos de los procesos judiciales deberán ser tramitados a través de la Ventanilla Virtual del aplicativo SAMAI, en el siguiente enlace: <https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co>

Se advierte que este despacho no recibirá correspondencia en los correos electrónicos del Juzgado y secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


OLGA CECILIA HENAO MARÍN
Jueza

JCBA

Firmado Por:
Olga Cecilia Henao Marin
Juez
Juzgado Administrativo
034
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 2926d11d81100993d2cf4b6134ea02b0693d48bb82837332ddb9fc580eaf0505

Documento generado en 12/06/2025 10:11:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>